



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2021 00182 00

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Referencia:

Expediente: 11001 33 35 010 **2021 00182 00**
Accionante: Banco de Bogotá
Accionado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Clase: Constitucional – acción de tutela

El Despacho procede a pronunciarse sobre la medida cautelar y la admisión de la tutela de la referencia, que le correspondió por reparto realizado por la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Bogotá.

Para decidir se **CONSIDERA:**

1. De la medida provisional. El Banco de Bogotá solicita, a manera de medida provisional, que se levanten de manera inmediata las medidas cautelares decretadas al Banco a través de la Resolución 36019 de 18 de marzo de 2021 de la UGPP. Las medidas cautelares decretadas por la UGPP las enunció así: (i) el embargo del CDT por valor \$250.123.3000 ejecutado por el depósito centralizado de valores de Colombia BVC – DECEVAL S.A.; y embargo de 172 establecimientos de comercio del Banco de Bogotá.

La presenta medida provisional se solicita con fundamento en que se cumplió con el pago de \$71.463.800 más intereses por \$258.297.100, ordenados por medio de la Resolución RDQ-2021-M-00002 de 7 de enero de 2021; y por otra parte, la considera las medidas cautelares graves y desproporcionadas, además de violar el debido proceso y del derecho de petición en cuanto que no ha respondido la comunicación de realización del pago, ni ha avalado el pago.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2021 00182 00

La medida provisional se despachará conforme a lo establecido en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, según el cual el juez podrá suspender la aplicación del acto que genere la amenaza o vulneración, dictar cualquier medida de conservación del derecho, u *“ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante”*. Sin embargo, precisa la precitada norma que cualquier decisión se tomará *“de conformidad con las circunstancias del caso”*.

Las medidas cautelares reguladas en el Capítulo I, Título I, Libro IV, del Código General del Proceso tienen un carácter restrictivo. El artículo 594 del CGP estableció los bienes que están exceptuados de la medida cautelar de embargo. A la luz de este precepto, no se advierte que el CDT y el establecimiento del comercio formen parte del conjunto de bienes inembargables. El cotejo entre la norma reguladora del embargo y los bienes embargados por la UGPP no permite evidenciar una vulneración del constitucional fundamental del debido proceso.

Ahora, el Banco de Bogotá aduce que realizó el pago por el cual se ordenó el embargo, y comunicó el pago a la UGPP, sin que hasta el momento hubiese obtenido el desembargo. Tal circunstancia *per se* no constituye una afectación del derecho de petición y del debido proceso, porque el proceso de cobro coactivo se rige por normas especiales, que no por la Ley 1755 de 2015 que regula el derecho de petición. Bajo las normas procesales especiales, los artículos 430 y subsiguientes del CGP, se puede invocar el pago a manera excepción de mérito.

Esto significa que el pago tiene un trámite posterior dentro del proceso de ejecución o cobro coactivo, respecto del cual no existe indicio de alguna vulneración de los derechos fundamentales. Incluso, el trámite posterior a la excepción de pago incluye la liquidación definitiva del crédito, valor que suele ser distinto al valor por el cual se embarga los bienes. Por ello, la simple manifestación del pago no libera automáticamente los bienes embargados.



Finalmente, el Banco de Bogotá califica de desproporcionado y grave la medida de embargo del establecimiento del citado CDT y del establecimiento del comercio. Al respecto, se observa que el valor del CDT embargado \$250.123.3000 es inferior al valor de la deuda, mientras que el embargo del establecimiento del comercio no impide que el Banco de Bogotá continúe con el desarrollo del objeto social y los derechos propios de las personas jurídicas. Adicionalmente, el Banco de Bogotá no demostró que tuviese comprometida la venta del establecimiento del comercio, pues el efecto de la medida cautelar sólo consiste en que lo hace intransferible.

Por si lo anterior no fuese suficiente, el artículo 590 del CGP le permite al ejecutado sustituir los bienes embargados *“por otras cautelas que ofrezcan suficiente seguridad”*. Siendo así, si el banco considera irracional el embargo del establecimiento de comercio, bien puede ofrecer otros bienes que ofrezcan a la UGPP suficiente seguridad del pago, máxime cuando la entidad ejecutante es una entidad que administra los recursos de los pensionados, los cuales garantizan el derecho constitucional fundamental a la seguridad social de miles de ciudadanos que sí son sujetos de especial protección constitucional.

En este orden de ideas, no se advierte que el comentado embargo cause un perjuicio irremediable que amerite decretar medidas provisionales, por lo que más adelante se denegará la medida solicitada.

2. De la admisión de la demanda. El artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 dispone que el único motivo válido para ordenar corregir la acción de tutela, consiste en que no se pudiese determinar el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela. Aquí, el texto introductorio es claro al enunciar los hechos por los cuales se solicita la protección de los derechos constitucionales fundamentales de petición y al debido proceso. Ello, se constituye en razón suficiente para admitir la demanda exclusivamente contra la UGPP, pues no se desprende la lectura de los mismos que



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2021 00182 00

se haga necesaria la vinculación de otras entidades públicas o terceros, menos aún que se formulen pretensiones con respecto a terceros.

En efecto, llama la atención que el Banco de Bogotá señale como vinculados a la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad Administrativa Especial General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, ITRC. Por ello, se procedió a revisar si forman parte de la relación jurídica sustancial que motiva la presente acción de tutela. El análisis permitió llegar a la conclusión que el extremo pasivo del cobro coactivo recae exclusivamente en la UGPP, y el asunto se puede definir sin la participación de aquellas entidades. Por ello, se negará la aludida solicitud de vinculación al proceso.

Por lo anterior, se **RESUELVE**:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de medida provisional de acuerdo con lo antes expresado.

SEGUNDO. ADMITIR la acción de tutela instaurada el Banco de Bogotá con NIT 52.264.095, contra la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP**, por las razones antes expuestas.

TERCERO. NOTIFICAR inmediatamente de este proveído al representante legal de la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP**, y a la persona encargada de estos asuntos al interior de la UGPP. Las notificaciones se surtirán al correo electrónico dispuesto para tal fin, o en su defecto a través de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos, para lo cual se adjuntará la copia de la acción de tutela y sus anexos. Las intervenciones se realizarán a través del correo electrónico de este Juzgado.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2021 00182 00

CUARTO. CONCEDER dos (2) días a los notificados para que ejerza el derecho de defensa, aporten las pruebas que considere necesarias, y rinda un informe sobre los hechos y omisiones denunciados por la parte accionante.

QUINTO. NEGAR la solicitud de vincular al proceso a las siguientes entidades: Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Unidad Administrativa Especial General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, ITRC.

Notifíquese y cúmplase

JOSÉ VICENTE CIFUENTES SALAZAR
JUEZ

gpg